



Gaceta de los Ayuntamientos

Publicación oficialmente autorizada por Real orden de 8 de marzo de 1926

Revista decenal de información y de consulta

En el «Consultorio Reus», Puerta del Sol, 13, Madrid, puede hacerse la suscripción a esta Revista

“Consultorio Reus” no tiene delegaciones,
agencias ni apartado en Correos.
Su única dirección es:
Puerta del Sol, 13. — Madrid

Publicación del
CONSULTORIO REUS
PUERTA DEL SOL, NÚM. 13. — MADRID
TELÉFONO 40-86 M.

GACETA DE LOS AYUNTAMIENTOS se publica
los días 1, 10 y 20 de cada mes.
Precios de suscripción: trimestre, 3 pe-
setas; semestre, 6 pesetas; año 10 pesetas.

SEGUNDO CONGRESO NACIONAL MUNICIPALISTA



LA SESION INAUGURAL

Ayuntamiento de Madrid

EL SEGUNDO CONGRESO NACIONAL MUNICIPALISTA

El objeto de esta importantísima asamblea lo habían condensado sus organizadores en la siguiente circular, que fué repartida profusamente por toda España:

La Unión de Municipios.—Su naturaleza y sus fines

Próxima la fecha de la celebración del II Congreso Nacional Municipalista, en el que va a investirse a la Unión de Municipios españoles de atributos legales y a dotarla de medios para que llene el alto cometido que le incumbe, consideramos oportuno hacer algunos someros esclarecimientos sobre la naturaleza de esta Institución, nueva en nuestro país, y la forma cómo ha de actuar en la vida patria.

Así, a la par que divulgamos lo que es la Unión de Municipios españoles entre las Corporaciones municipales y entre cuantos se interesan en los cada día más complicados y atrayentes problemas de la gobernación local de los pueblos, procuramos salir al paso a los supuestos erróneos que, de buena fe o con torcida intención, puedan hacerse acerca de este organismo, cuyo advenimiento a la vida legal está tan cercano.

La aspiración fundamental de la Unión de Municipios españoles es la de coordinar los esfuerzos de todos los Ayuntamientos para acrecentar su eficacia.

Como en su proyecto de reglamentos proclama, la Unión busca el estrechamiento de los lazos fraternales entre los Ayuntamientos hispanos; de una parte, para impedir abusivas intromisiones de poderes extraños en las funciones privativas de las Municipalidades y para mantener la intangibilidad de su autonomía; de otro, para facilitar, mediante el estudio en común y la intercomunicación frecuente de referencias y observaciones relativas a su respectiva actuación, el conocimiento y resolución de los problemas de carácter municipal e ir asentando en bases firmes la técnica y la práctica de la gobernación de las villas y ciudades.

Ni la Unión de Municipios españoles ni ninguna de las federaciones similares del extranjero pretenden resucitar formas pretéritas de vida municipal, ni proclamar el culto a la eternidad de ciertas características locales. Pasaron los tiempos en que las Comunas levantaban milicias y ejercían el Poder judicial. Estas y otras funciones radican en el Estado que es el que debe conservarlas como órgano soberano de la unidad nacional y de la declaración e interpretación del derecho. Sabe que de momento en momento, a medida que la civilización progresa y se extiende, se borran los particularismos locales y las costumbres y las ideas tienden a la uniformidad; pero también sabe que dentro del Estado moderno hay funciones de la exclusiva competencia de los Municipios, y otras, en los que les está reservado una importantísima participación, pues el Municipio, no obstante los radicales cambios habidos en las instituciones políticas de los pueblos, continúa siendo la Corporación oficial en que es más íntimo el contacto entre gobernantes y gobernados, y el único instrumento capaz de atender las necesidades internas de las agrupaciones humanas.

La Unión de Municipios españoles propugnará, amoldándose, naturalmente, a las leyes, por la autonomía de los Ayuntamientos concebida en los términos antes indicados, es decir, en los que preceptúan las modernas concepciones del derecho político.

Y con el respeto al fuero y a la autonomía municipi-

pal recabará los medios económicos de hacerla efectiva, pues, sin ellos, la autonomía de los Ayuntamientos sería una mera ficción.

La Unión de Municipios españoles es política en el sentido noble de la palabra, por cuanto trata de influir en la vida del Estado, mas absolutamente ajena a todo partido político, a los actuales, a los pasados y a los que se constituyan en lo futuro. Sobre este punto su actitud fué claramente definida en las declaraciones que hizo públicas el Consejo directivo en su primera reunión y que dicen así:

“La Unión de Municipios españoles es extraña a toda fracción política y no podrá adscribirse a ningún partido determinado sin contrariar la razón de su existencia.

Como todas las federaciones municipalistas similares del extranjero, la Unión de Municipios españoles propugna por que los problemas de la vida local se planteen, traten y decidan sustrayéndolos, en lo posible, a los frecuentes cambios que se operan en la política general del país.

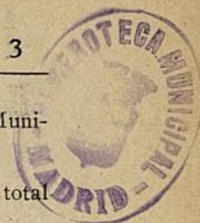
Importa también hacer constar que por la forma como va a regirse la Unión el día que modifiquen los actuales Ayuntamientos, bien por que se llame a consulta al Cuerpo electoral, bien por cualquier otra causa, el Consejo directivo pasará automáticamente a manos de los representantes que designen las propias municipalidades a tenor de lo preceptuado en los estatutos federativos.”

Tiene la Unión de Municipios otra función de capital importancia que cumplir: la de estudiar los grandes problemas que a diario plantea la Administración de la ciudad y la organización y funcionamiento de sus servicios. Estos problemas ofrécese con mayor o menor intensidad en todas las capitales. Ciertamente, que algunos de estos problemas parecen referirse exclusivamente a las grandes urbes, surgidas al calor de la concentración industrial operada en el siglo XIX, y tal fué la creencia dominante durante algún tiempo; mas la realidad ha patentizado que casi todos ellos se producen, aunque revistiendo modalidades distintas, lo mismo en la gran ciudad que en la modesta villa.

Con efecto, allí donde nos congregamos para hacer vida común, aparece como corolario inevitable la necesidad de establecer una organización administrativa y de implantar servicios sanitarios, de policía y de cultura, en fin, cuantos son menester para defendernos de las adversidades de la naturaleza y para colocarnos en aptitud de llenar convenientemente los deberes ciudadanos que impone la democracia, base obligada de todo Estado progresivo.

Pues bien, la Unión de Municipios españoles, como las demás del resto del mundo trata de ser el laboratorio donde los Ayuntamientos, asistidos del precioso concurso de las personas especializadas en las diversas materias que integran la completa y modernísima ciencia del urbanismo, estudie los problemas municipales con carácter general y concretamente en relación con Municipalidades determinadas.

El campo de acción de estas Federaciones de Ayuntamientos es inmenso; comprenden las cuestiones que atañen a la vida jurídica de las Municipalidades y a la determinación de sus relaciones con los otros organismos del Estado y con los ciudadanos que las integran; las que afectan a su estructura administrativa y a los



modos de obtener los recursos que han de nutrir sus presupuestos; la de proveerse de funcionarios idóneos; la de incorporar la libre iniciativa ciudadana a la labor oficial de sus Concejos y de sus empleados; la de atender con criterio acertado el desarrollo de la ciudad; la de cuidar la instalación y funcionamiento de los servicios en forma que aseguren a los vecindarios un máximo de garantías sanitarias; la de estimular el desenvolvimiento intelectual y moral de los ciudadanos; la de organizar la asistencia social a la infancia desvalida, a la ancianidad desamparada, y en general, a los indigentes, cualquiera que sean las causas de su desgracia...; en fin, cuanto afecta al vecino, del que la Municipalidad es—debe ser—cosa tutora desde que asoma a la vida hasta que su cuerpo vuelve a la tierra.

Con lo expuesto creemos conseguido nuestro propósito de dar una idea de lo que es la Unión de Municipios, y de lo mucho bueno que de ella cabe esperar si los Ayuntamientos españoles continúan prestándole la acogida que hasta ahora le prestan.

Interesa hacer público que la Unión de Municipios españoles se organiza cuando ya están funcionando otras muchas idénticas en varias naciones: Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Checoslovaquia, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Inglaterra, Italia, Letonia, Polonia, Rumania, Suecia, Suiza y algunos otros países cuentan con uniones semejantes a la que estamos a punto de organizar. Ello constituye una ventaja, porque la experiencia de las Uniones extranjeras nos suministrará precisas enseñanzas.

Respecto de la oportunidad de constituir la Unión de Municipios en España, el hecho de que apenas lanzado el proyecto se han inscrito en ella 700 Ayuntamientos, acredita que la idea ha llegado en sazón y que si el acierto nos acompaña en estos primeros pasos, la Unión será bien pronto un organismo potente y apto para la realización de los transcendentales fines que acabamos de esbozar.

Proyecto de Reglamento de la Unión de Municipios españoles que elaboró el Primer Congreso Nacional Municipalista y que, por acuerdo de éste, se ha sometido al estudio previo de los Ayuntamientos

Artículo 1.º Por el presente Estatuto se constituye la Unión de Municipios españoles.

Art. 2.º Los fines de la Unión de Municipios españoles, son:

Fomentar la autonomía de las Municipalidades dentro de la superior unidad política y administrativa del Estado.

Contribuir al estudio y difusión de los problemas que se refieren al Gobierno municipal.

a) Creando una oficina permanente que se ocupe de dichos problemas y comunique el resultado de sus trabajos a los Municipios adheridos a la Unión.

b) Estableciendo un servicio de información que periódicamente comunique a organismos y personal adheridos a la Unión las novedades más salientes de la vida municipal de España y del extranjero.

c) Constituyendo, a medida que las circunstancias lo exijan, Secretarías especiales para preparar proyectos o desarrollar cometidos relativos a extremos concretos de la acción municipalista (por ejemplo: fomento de la vivienda, municipalización de servicios, consultorio jurídico, etc.)

Organizar periódicamente Congresos y reuniones nacionales de Ayuntamientos.

Establecer y desarrollar relaciones con los Ayuntamientos del mundo y con la Unión Internacional de Ciudades y Villas.

Art. 3.º Podrán formar parte de la Unión de Municipios españoles:

Los Ayuntamientos de España.

Las Academias y Sociedades que se consagren total o parcialmente a asuntos de carácter municipal.

Los particulares que deseen participar de los trabajos de la Unión.

Art. 4.º Para atender al cumplimiento de sus fines, la Unión de Municipios españoles tendrá las siguientes fuentes de ingreso:

Los donativos y legados.

Las cuotas de sus asociados; y

Lo que produzcan sus publicaciones.

Art. 5.º Regirán las siguientes cuotas:

Para los Ayuntamientos:

De 30 pesetas para los de poblaciones de menos de 3.000 almas.

De 50 pesetas para los de 3.001 a 5.000 id.

De 100 pesetas para los de 5.001 a 10.000 id.

De 200 pesetas para los de 10.001 a 20.000 id.

De 400 pesetas para los de 20.001 a 40.000 id.

De 500 pesetas para los de 40.001 a 75.000 id.

De 750 pesetas para los de 75.001 a 100.000 id.

De 1.000 pesetas para los de 100.001 a 250.000 id.

De 1.500 pesetas para los de más de 250.001 id.

Las cuotas de colectividades adheridas serán de 50 pesetas y las individuales de 10.

La cuota será anual, en todo caso.

Art. 6.º La Unión de Municipios será dirigida por un Consejo que ostentará su representación legal y encauzará su labor atemperándose a los preceptos del presente Estatuto.

Integran este Consejo quince individuos designados por las Asambleas Nacionales de la Unión. De ellos, diez, por lo menos, habrán de ser representantes de Municipalidades, procurando que estén representadas las diversas categorías de Municipios, y renovándose sus miembros por mitad cada dos años.

El Consejo se reunirá periódicamente, a ser posible, todos los trimestres, citando con tiempo bastante a los miembros que radiquen en provincias.

En el Consejo se formará un Comité ejecutivo, del que formará parte el Presidente, el Tesorero, el Secretario y dos Vocales, que forzosamente residirán en Madrid. Este Comité será, como su nombre indica, el encargado de llevar a efecto las decisiones del Consejo, de resolver los asuntos urgentes y de administrar la Unión de Municipios.

Art. 7.º Todos los años se celebrará una Asamblea general.

El orden del día se formará con los temas que proponga el Consejo y los miembros de la Unión, a los que se le invitará con tiempo suficiente para que formulen sus iniciativas en este respecto.

La labor de convocar y reglamentar estas Asambleas será función exclusiva del Consejo.

Se celebrarán Asambleas o Congresos en la población que haya elegido la Asamblea general prece-dente, y si ésta no lo hubiera hecho, la elección la verificará el Consejo general, cuando estime pertinente el Consejo y cuando lo propongan un número de Ayuntamientos adheridos equivalente, por lo menos, al 20 por 100 de los que estén inscritos en la Unión.

Podrán tomar parte en los Congresos, así ordinarios como extraordinarios, las entidades no municipales y los individuos que pertenezcan a la Unión, debiendo en las votaciones especificarse los votos emitidos por representantes de Municipios, entidades y particulares.

En determinados asuntos de exclusivo interés corpo-

rativo, podrá determinarse por el Consejo que sólo tengan voto los representantes municipales.

Los Delegados de los Municipios tendrán de uno a nueve sufragios, según la cuota que paguen las municipalidades que representen.

Art. 8.º El Consejo podrá valerse del concurso de personas experimentadas en cuestiones municipales para la realización de su cometido y para formar las Secretarías especiales a que se refiere el apartado c del artículo 2.º

Sin embargo, para que éstas Secretarías tengan carácter definitivo, será menester el acuerdo favorable de la Asamblea.

Art. 9.º Una vez constituida la Unión de Municipios españoles, solicitará su ingreso en la Unión Internacional de Villas, cuya oficina central radica en Bruselas, e invitará a las ciudades americanas de origen español a formar una Unión de las Ciudades de habla castellana.

Art. 10. Los Estatutos pueden ser revisados en cualquier momento por una Asamblea general extraordinaria, convocada por iniciativa del Consejo general o a petición de un 20 por 100 de votos de la Asamblea general. En caso de disolución, los objetos materiales y colecciones que la Unión tenga en su poder, se entregarán a la Cátedra oficial de Derecho municipal. El haber líquido que exista en Caja se distribuirá entre los Ayuntamientos españoles en la forma que se acuerde.

ARTICULO TRANSITORIO

Los acuerdos que se adopten en este Congreso en relación con la Unión de Municipios, serán sometidos a todos los Ayuntamientos de España, para que en el plazo de tres meses expresen parecer acerca de esta iniciativa. Transcurrido este tiempo, se convocará un Congreso extraordinario para proceder a la constitución de la Unión y aprobar sus Estatutos definitivos.

Para realizar los trabajos preparatorios de dicha Asamblea y cuanto acuerde este Congreso de índole ejecutiva, se designará una Comisión que presidirá el actual Alcalde de Madrid, señor conde de Vellallano.

Enmiendas presentadas al proyecto de Reglamento de la Unión de Municipios españoles.

AL ARTICULO QUINTO

El Ayuntamiento de Oña (provincia de Burgos) propone:

Que las cuotas sean fijadas en relación al número de habitantes de cada Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Vilajuiga (provincia de Gerona) propone:

Que a los Municipios que no lleguen a 1.000 habitantes se les imponga una cuota especial que oscile entre 10 y 15 pesetas.

El Ayuntamiento de Bocigas de Perales (provincia de Soria) propone:

Que la categoría primera que figura en el artículo quinto se desdoble de la siguiente forma:

Municipios menores de 1.500 habitantes..... 15 pesetas.
Idem íd. de 1.501 a 3.000 ídem..... 30 —

El Ayuntamiento de Valladolid propone:

Que la cuota que deban satisfacer los Municipios adheridos se establezca en proporción al número de habitantes, fijando en un céntimo por habitante y año el importe de la cuota.

PROPUESTAS COMO ADICION

El Ayuntamiento de San Ginés de Vilasar (provincia de Barcelona) propone:

Que entre los distintos fines de la Unión se incluya el de la creación de una revista o boletín mensual o quincenal, órgano de la misma, y en el cual se traten asuntos y problemas municipales en toda su complejidad (sanidad, obras públicas, escuelas, repoblación forestal, circulación, mataderos, etc.) como lo publican *L'Union des Villes belgues* y de otros países europeos y americanos.

El Ayuntamiento de Torremocha del Pinar (provincia de Guadalajara) propone:

Se adicione al reglamento un artículo que diga: "Todo asociado tiene derecho a solicitar en cualquier tiempo del Consejo de la Unión de Municipios españoles se le dé de baja como tal asociado, acordándose así siempre que se halle al corriente del pago de las cuotas y demás obligaciones contraídas."

El Ayuntamiento de Chantada (provincia de Lugo), a propuesta del Colegio oficial del Secretariado local de la provincia de Lugo, propone:

Que con el carácter de filiales de la Unión de Municipios españoles se constituyan Uniones provinciales de Municipios.

El Ayuntamiento de Tejares (provincia de Salamanca) coincide con la anterior propuesta del Ayuntamiento de Chantada, agregando que estas Uniones provinciales celebrarán periódicamente, por provincias, Asambleas, elevando las propuestas al Consejo central, debiendo cedérselas el 50 por 100 de las cuotas para atender a su funcionamiento.

Convocatoria del Congreso

Cumpliendo los acuerdos de la Primera Asamblea nacional Municipalista, el Consejo directivo de la Unión de Municipios españoles convoca a los Ayuntamientos inscriptos en dicha Federación y a los que deseen incorporarse a ella y a las Corporaciones privadas y particulares que quieran integrarse en este movimiento, al Congreso que se celebrará en Madrid los días 26 y siguientes del mes en curso.

El orden del día a que el Congreso ajustará sus tareas es el siguiente:

- 1.º Presentación de credenciales y constitución del Congreso.
- 2.º Examen de cuentas.
- 3.º Discusión y aprobación del Reglamento de la Unión nacional de Municipios.
- 4.º Discusión de temas:
 - a) Bases para elaborar una ley general de urbanización.
 - b) Bases para una ley que imponga la mancomunidad obligatoria para los servicios sanitarios y de policía urbana a los Ayuntamientos cuyos poblados se hallen próximos.
 - c) Medios de fortalecer las Haciendas locales.
- 5.º Ingreso en la Unión Internacional de Villas.
- 6.º Designación del Consejo directivo de la Unión de Municipios españoles.
- 7.º Señalamiento de fecha y lugar para la celebración del próximo Congreso.

A más de los actos propios del Congreso se preparan excursiones a Toledo y a El Escorial y otros que

organizará el Ayuntamiento de Madrid, con el propósito de poner de relieve el estado de sus servicios y de obsequiar a los representantes de provincias que durante la celebración de la Asamblea van a ser sus huéspedes.

Podrán concurrir al Congreso y tomar parte en sus deliberaciones:

Los representantes que designen los Ayuntamientos que estén inscriptos en la Unión de Municipios y los que comuniquen este deseo hasta la fecha en que el Congreso inicie sus tareas.

Los representantes de Corporaciones privadas inscriptas en la Unión y las que se incorporen hasta el día 26.

Los particulares que se hayan adherido a la Unión de Municipios y los que lo hagan hasta el día 20 de abril previo abono de la cuota anual (10 pesetas).

Los congresistas podrán presentar trabajos relacionados con los temas que van a ser objeto de las deliberaciones de la Asamblea; mas sólo se imprimirán y distribuirán entre los asambleístas, los que se presenten en la oficina de la Unión hasta las doce de la noche del día 20 de abril.

En el Congreso tendrán preferencia las deliberaciones sobre el proyecto de reglamento y sobre el tema relativo a la urbanización.

Los temas de mancomunidad de servicios y de Haciendas locales se debatirán en segundo término sin perjuicio de adoptar acuerdos, desde luego sobre los extremos que no susciten oposición.

Antes de la semana próxima (días 12 al 19) se repartirán por correo impresos con el proyecto de Reglamento de la Unión de Municipios españoles y de las enmiendas formuladas al mismo por diversos Ayuntamientos. En el documento se hará también una sucinta referencia de lo que son las Uniones de Municipios, de cómo se han formado y funcionan en el extranjero, y del importantísimo papel que desempeñan como factores propulsores de la vida local.

Los impresos atinentes a los otros extremos del orden del día se facilitarán al comenzar el Congreso.

Las Compañías de Ferrocarriles, accediendo a la petición formulada por el Comité ejecutivo de la Unión de Municipios españoles han tenido la amabilidad de conceder para los asistentes a la referida Asamblea las ventajas de la tarifa especial con billetes de ida y vuelta, utilizables durante los días 21 de abril a 1 de mayo para venir, y del 27 de abril al 12 de mayo para regresar, con una economía que supone cerca de un 40 por 100.

Además han hecho la concesión especial, en honor de los congresistas, de que puedan utilizar los trenes rápidos y expresos los poseedores de billetes de primera clase, satisfaciendo únicamente los suplementos correspondientes y con un máximo de 18 congresistas en cada uno de estos trenes.

Para utilizar estas ventajas es necesario proveerse de la correspondiente tarjeta de identidad como asambleísta, que serán facilitadas por la oficina de la Unión de Municipios españoles.

Los congresistas de provincias que lo deseen pueden obtener hospedaje en Madrid por conducto de la oficina de la Unión de Municipios españoles.

Para ello es menester que escriban expresando sus deseos a la oficina (plaza de la Villa, 5, Ayuntamiento de Madrid).

Madrid, 10 de abril de 1926.

Por el Consejo directivo:

El Presidente,
CONDE DE VALLELLANO

El Secretario,
MARIANO GARCIA CORTES

Con extraordinaria brillantez y concurrencia se viene celebrando durante toda la semana actual el segundo Congreso Nacional Municipalista, al que la Prensa de todos los matices viene prestando gran atención, dando a sus sesiones extensión inusitada.

En la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas se celebró en la noche del domingo 25, la reunión del Consejo directivo de la Unión de Municipios.

Asistieron el alcalde de Madrid, conde de Vallellano; don José Elósegui, alcalde de San Sebastián; don José Luis Illanes, representante de Sevilla; don Recaredo Fernández de Velasco, de Murcia; don Luis Villa, de Zaragoza; don Ramón Alapont, de Valencia; don Antonio Calama, de Salamanca; don Luis Damians, de Barcelona, y los señores Gascón y Marín y García Cortés.

Quedaron ultimados los detalles para la celebración del Congreso, y fué aprobado el programa, ya conocido.

Sesión preparatoria

El lunes, a las doce, se celebró en el salón de actos de la Academia de Ciencias Morales y Políticas la sesión preparatoria.

Ocupó la presidencia el alcalde, quien dirigió a los congresistas un breve discurso de salutación y enunció los temas que ha de tratar la asamblea.

El alcalde de Sevilla, en nombre de todos los congresistas, agradeció las frases del conde de Vallellano, quien, después de ceder la presidencia al alcalde de San Sebastián, don José Elósegui, se retiró.

El secretario del Congreso, señor García Cortés, expuso el programa que aquél ha de seguir en sus tareas y saludó también a los asambleístas.

Luego se procedió a la elección de comisiones, que han quedado constituidas en la siguiente forma:

Comisión primera (reglamento para el ingreso en la Federación internacional de villas y preparación del próximo Congreso): presidente, señor Gascón y Marín; vicepresidente, don Ricardo Fernández de Velasco, catedrático y representante del Ayuntamiento de Murcia; secretario primero, señor Guerrero; ídem segundo, señor Rovira.

Comisión segunda (ley de Urbanización): presidente, don Luis Damián, representante del Ayuntamiento de Barcelona; vicepresidente, señor Albice, alcalde de Zaragoza; secretario primero, alcalde de Irún; ídem segundo, señor Pi y Suñer.

Comisión tercera (demás temas y ponencias de carácter general): presidente, don José Luis Illanes, alcalde de Sevilla; vicepresidente, don Ramón Alapont, representante del Ayuntamiento de Valencia; secretario primero, señor Pugas; ídem segundo, señor Cuesta.

Para presidir las sesiones plenarias se designó a los señores conde de Vallellano, Elósegui (alcalde de San Sebastián), Del Valle (representante del Ayuntamiento de Zaragoza), Amézaga (alcalde de Burgos) y Calama (alcalde de Salamanca).

El señor Elósegui anunció las horas y lugares en que han de reunirse las comisiones, y se levantó la sesión.

Reunión de secciones

A las cinco de la tarde se reunieron también en la Academia de Ciencias Morales y Políticas las secciones primera, que estudia el nuevo Reglamento de la Unión de Municipios, cuyo proyecto fué aprobado, y la tercera, a cuyo cargo están los temas referentes a las Haciendas locales, Mancomunidades y temas de carácter general. Esta sección proseguirá sus trabajos, que no ha terminado.

Sesión inaugural

A las siete y media de la tarde dió comienzo en el patio de Cristales del Ayuntamiento la primera sesión plenaria del Congreso nacional municipalista. Presidió el director general de Administración local, y a su lado tomaron asiento los señores alcalde de Madrid, el catedrático de la Universidad de Valencia, señor Jordana Pozas; el teniente de alcalde de Barcelona, don Luis Damians; el señor Elósegui, alcalde de San Sebastián, y el señor García Cortés, secretario del Comité Nacional de la Unión de Municipios.

Este último explicó el objeto de la convocatoria y dijo que los Ayuntamientos adheridos representan la suma de seis millones de españoles.

Después estudió los presupuestos de numerosos Ayuntamientos de España para deducir que gastaban menos que lo que destinan a sus atenciones gran número de familias. Expuso su opinión de que con Ayuntamientos fuertes se logrará un Estado poderoso. Se mostró partidario de la autonomía municipal dentro del mayor respeto a la unidad de la Patria. Expuso las necesidades a que hoy tienen que atender los Municipios españoles, las cuales requieren mucho dinero. Habló de la mortalidad existente en España y de la triste significación que el dato tiene.

El señor Damians saludó a los reunidos y declaró que Madrid ha alcanzado en los últimos años un desarrollo considerable, y que es una de las poblaciones más sugestivas y bellas de Europa. Dedicó elogios al actual alcalde, que, con su actividad, ha contribuido a este progreso.

Explicó los motivos que determinaron la unión proyectada de los Municipios españoles, uno de los cuales fué unir con la mayor cordialidad a todos los Ayuntamientos, con deseo evidente de lograr una autonomía de acuerdo perfecto con la integridad de la Patria y la plena soberanía del Estado. (Aplausos).

Propone que el próximo Congreso nacional, posterior al internacional de Sevilla, se celebre en Barcelona.

El señor Elósegui habla del artículo 2.º del proyecto de Reglamento de la Unión de Municipios, y dice que teme suceda en esta reunión, como ocurre con otras, que se adopten acuerdos que, después, sean olvidados. Cree que la autonomía administrativa es excelente, pero estima que la primera necesidad actual de los Ayuntamientos es la libertad para la provisión de los destinos civiles, sin la cual la autonomía no sería verdadera.

Añade que, siendo la vida municipal cada día más complicada, requiere mayores recursos. Su opinión es la de que es absolutamente indispensable la previa organización de la Hacienda general, así como que el Estatuto evite, en todo momento, la contradicción en las disposiciones que dicte.

Habla del próximo circuito de automóviles de San Sebastián, en el que figurarán 15.000 coches.

Estima un gran beneficio para la vida nacional la celebración del actual Congreso municipalista, pues también es un convencido de que el progreso de la vida local será la base del engrandecimiento de España.

El señor Jordana de Pozas cree que la Unión de Municipios, para cuya efectividad sólo faltan algunas horas, significa un hecho decisivo y de gran transcendencia para la vida española.

Cree que este resurgir representa una acción promovida desde arriba. El advenimiento del régimen actual abrió un interrogante en la vida del país, cuya respuesta es la Unión de Municipios.

Declara que esta es una unión espontánea. Recuerda el Congreso internacional de ciudades, donde no pudo figurar España, por no tener fundada su Unión de Municipios, y expone que por ello es innegable la oportunidad del actual Congreso.

Explicó que la autonomía es una bella idea; pero que exige una organización ciudadana y garantías de que será respetada, así como que los Ayuntamientos dispongan de una hacienda saneada, de excelentes administradores, y de la asistencia de la opinión pública.

Dedicó un recuerdo a don Antonio Maura, a quien tanto debe el progreso de la vida municipal.

Terminó diciendo que su opinión firme es la de que los Ayuntamientos deben ser administrados por las personas que los ciudadanos designen libremente.

El director de Administración, señor Muñoz Llorente, dirigió un saludo muy cordial a los asambleístas, en representación del Gobierno, y en especial del señor Calvo Sotelo, que presidió la sesión de clausura del anterior Congreso municipalista.

Dijo que las dos grandes cuestiones a tratar son el reglamento de la Unión de Municipios y la mejora o ensanche de las poblaciones.

Leyó un telegrama del presidente de la Unión Internacional de Villas y Ciudades, dirigido al Congreso, celebrando su reunión, y haciendo votos porque se logre la unión de los Municipios españoles.

Después manifestó que el Gobierno acogerá las conclusiones del Congreso que estime favorable para la vida municipal, y añadió que, por anticipado, podía decir que, bajo estos auspicios, el Congreso debe trabajar con fe.

Todos los oradores fueron muy aplaudidos.

Segunda sesión plenaria

Tuvo lugar el martes, a las once, en el salón de actos de la Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Presidió el concejal del Ayuntamiento de Zaragoza y catedrático, don Luis del Valle, y ocuparon con él la presidencia los señores Alapón e Illanes, representantes de Valencia y Sevilla, respectivamente.

Se discutió y fué aprobado en su totalidad, aunque con algunas modificaciones, el reglamento para la unión de municipios españoles.

En la discusión tomaron parte numerosos representantes de Ayuntamientos, entre ellos, los señores Fernández de Velasco; el alcalde de Valladolid, señor Moliner; señor Gómez Sanz, concejal del mismo Municipio; Cuesta, secretario de Colmenar; señor Narbona, representante del Ayuntamiento de Siero; señor Illanes, concejal de Sevilla; señor Cabanillas, representante del Instituto de Estudios Municipales de Barcelona, y señores González Ochoa y García Cortés, secretarios del Congreso.

Los temas que se sometieron a discusión fueron: la constitución del Consejo directivo, respecto de la cual se solicitó fueran reservados puestos a determinadas Corporaciones o que hubiere un número de representantes de determinadas clases de Ayuntamientos.

También se discutió la cuestión de las cuotas que habrán de abonar los Municipios.

El delegado de Valladolid defendió una enmienda pi-

diendo se estableciera la cuota en proporción al número de habitantes, a razón de un céntimo por cada vecino.

Respecto de esto se acordó que la escala de cuotas propuesta, que empezaba en 30 pesetas para las poblaciones menores de 3.000 almas, se redujera a otra categoría inferior de 15 pesetas para los pueblos menores de 1.500 habitantes.

Se acordó asimismo que el número de delegados del Consejo sea el de 21 en vez de los 15 que se proponían. De los primeros formarán parte 15 representantes de Ayuntamientos.

Al artículo 7.º se incorporaron dos párrafos facultando a los Ayuntamientos para designar sus representaciones en los Congresos sucesivos, pudiendo nombrar personas extrañas a la Corporación, aunque no se les computarán más votos que los que correspondan a la suma de cuotas que abonen los Ayuntamientos representados, dentro de las normas establecidas.

El artículo 9.º pasó a ser adicional, y fué suprimido el artículo transitorio.

Tercera sesión

Se celebró a las once de la mañana del viernes, bajo la presidencia del teniente de alcalde de Salamanca, señor Coloma, quien dirigió un cariñoso saludo a los congresistas, pasándose en seguida a discutir los dictámenes emitidos por la Comisión segunda: "Asuntos varios".

El presidente de la Comisión, señor Illanes, de Sevilla, expuso con frase correcta y concisa las diversas cuestiones examinadas por la ponencia y el fundamento de las soluciones que proponía, haciendo muy atinadas consideraciones sobre todas ellas, en particular acerca de la relativa a provisión de los destinos civiles y a la conducta abusiva que la Compañía de Teléfonos observaba con todos los Ayuntamientos.

Seguidamente se sometieron a la consideración de la Asamblea los dictámenes, que tras ligeros debates fueron aprobados, acordándose, en su consecuencia:

Primero. Que el próximo Congreso Municipalista consagre su atención preferente al examen y aprobación de un proyecto general de Haciendas locales.

A tal fin se designará una ponencia con carácter permanente.

Segundo. Que a fin de borrar la desigualdad existente en la vía contenciosa entre los reclamantes de acuerdos municipales y los Ayuntamientos, y en evitación de una prodigalidad de tales recursos, que se solicite la desaparición de la gratuidad en las reclamaciones contenciosoadministrativas.

Tercero. Que por el daño que con ello se infiere a las Haciendas municipales, no se acceda a la desgravación de los vinos, y que, en caso de acordarse ésta, se conceda a los Ayuntamientos los sustitutivos oportunos para mantener el equilibrio en sus presupuestos y evitar, por consecuencia, la existencia del déficit.

Cuarto. Que se solicite del Estado que las tasas y derechos municipales que ha de satisfacer, por prescripción del artículo 362 del Estatuto municipal, así como los reintegros y cantidades que por cualquier concepto deba ingresar en arcas municipales, sean abonadas dentro del trimestre siguiente al en que se devengaron, y que las excepciones que puedan concederse al amparo del citado proyecto no supongan nunca reconocimiento de especial fuero, debiendo, por tanto, someterse las Empresas exentas a las disposiciones de la autoridad municipal en cuanto a la ejecución de obras, trabajos o prestación de servicios por los que nazca la obligación de contribuir.

Quinto. Que los Ayuntamientos acepten gustosos las preferencias establecidas en favor de los sargentos y

licenciados del Ejército para la adjudicación de destinos civiles, llegando, si ello fuere preciso, a una mayor proporcionalidad en tales concesiones; pero creen necesario, para no destruir la autoridad de los Ayuntamientos, que el nombramiento y separación de los destinos sean hechos por los Ayuntamientos, de acuerdo con las normas del ministerio de la Guerra y reglamentos aprobados por las respectivas Corporaciones municipales.

También se acordó que constara en acta el agradecimiento de la Unión de Municipios al Instituto de enseñanzas municipalistas que radica en Barcelona por la oferta de publicar una revista como órgano oficial, declinando el ofrecimiento, por ser propósito de la Unión editarla, e interesar del ministro de Hacienda la rápida y favorable resolución de la petición que verbalmente le tiene formulada el alcalde de Almadén en relación con la exención que las minas del Estado, allí existentes, disfrutaban por virtud de lo dispuesto en el vigente Estatuto municipal.

Sobre este último extremo habló el alcalde de Almadén en términos que llevó el convencimiento a los oyentes de la justicia de su causa.

Resulta que, por virtud de la exención del Estado, el Ayuntamiento no recauda lo bastante para atender a las más perentorias necesidades comunales.

El representante del Instituto de Estudios Municipales, señor Cabanillas, habló de la labor que esta entidad se propone llevar a efecto, y luego de mostrar su satisfacción por la acogida que le ha prestado el Congreso, anunció que dicho organismo colaborará con entusiasmo en la obra iniciada por la Unión de Municipios españoles.

A la una y media de la tarde se levantó la sesión.

Cuarta sesión

Tuvo lugar a las seis de la tarde del miércoles, ocupando la presidencia, como en la mañana, el señor Coloma.

Se dedicó a tratar del dictamen de la Comisión segunda: Urbanización.

Su presidente, el señor Damiáns, de Barcelona, refirió con gran claridad y discreción la fatigosa labor efectuada para elaborar las bases de la ley general de urbanización que se sometía a estudio de los asambleístas, y puso de relieve la gran importancia que dicha ley tiene para el desarrollo de los pueblos.

El señor Casadevonte, alcalde de Irún, leyó las bases, que fueron aprobadas tras breves esclarecimientos de los señores Fernández de Velasco, de Murcia, y García Cortés y de una brevísima discusión incidental sobre la cuestión tributaria, en la que intervinieron los señores Prieto Pazos, de la Económica Matritense; Del Valle, de Zaragoza, y Cort, catedrático de la Escuela de Arquitectura de Madrid.

En estas bases, que publicaremos íntegras por el interés que encierran, se determina que los proyectos de reforma y ampliación de ciudades se someterían a una ley general de urbanización; que están obligados a hacer proyectos de urbanización y reforma los Ayuntamientos de más de 10.000 almas; los de cinco a 10.000 que hayan aumentado en el último décimo su población en un 20 por 100 o más; los de lugares que tengan balneario o sean estaciones de verano o invierno, y los comprendidos en la cintura de las ciudades de más de 100.000 almas; que los proyectos han de iniciarse en el plazo de un año y los anteproyectos terminarse antes de cuatro.

Además se establecen los requisitos de los proyectos y anteproyectos, su tramitación, los recursos de que

dispondrán los Municipios para ejecutarlos; la prohibición de aplicar esos recursos a gastos extraños a las obras; la derogación de la ley de reforma y saneamiento de las poblaciones de 1895; la de Ensanche de 1892 y sus reglamentos, y la modificación de varios preceptos del Estatuto y de su reglamento de obras.

Adoptaránse otros acuerdos relacionados con las contribuciones especiales autorizadas para la ejecución de obras públicas urbanas y con propuestas formuladas por la Sociedad de Aparejadores y la Compañía Madrileña de Urbanización.

Levantóse la sesión a las siete y media de la tarde.

RELACIONES JURIDICAS

LEGITIMACION DE ROTURACIONES ARBITRARIAS

CONTINUACION

Dice el art. 159 del Estatuto municipal, en su apartado 4.º, párrafo 2.º:

La legitimidad de roturaciones arbitrarias, se regula por el Real decreto de 1.º de diciembre de 1923, (en su Reglamento de 1.º de febrero de 1924), y sólo podrán otorgarse a los vecinos.

Estos preceptos tenían carácter general, pues se aplicaron a la legitimación de terrenos pertenecientes al Estado y a los de propios o comunes de los pueblos; actualmente sólo se aplican a los terrenos del Estado, pues la legitimidad en los propios o comunes se regula por Real decreto de 22 de diciembre de 1925.

Roturaciones en terrenos del Estado.—Real decreto de 1.º de diciembre de 1923.—Los que con anterioridad a este Decreto vengan poseyendo, por sí o por sus causahabientes, terrenos por ellos roturados, cercados, edificados o transformados en explotaciones agropecuarias o forestales, pertenecientes al Estado, podrán legitimar la posesión adquiriéndolos en plena propiedad, si lo solicitan de la Delegación de Hacienda de la provincia respectiva, dentro de un plazo de un año, a contar desde la publicación de este Real decreto, y abonar el justo precio que tuvieren los mencionados terrenos en la época de la ocupación, precio que fijarán los funcionarios técnicos, designados por el Ministerio de Hacienda.

Para legitimar la propiedad de extensión que no exceda de tres hectáreas de cabida, bastará acreditar, en debida forma, la posesión previa, continua durante un año y un día. Para cabidas mayores, será preciso acreditar otro año anterior de posesión por cada hectárea, hasta llegar a diez hectáreas, que es el máximo cuya legitimación se concede. Los indicados plazos no podrán contarse nunca desde fecha posterior a la de este Real decreto.

Se exceptúan en la aplicación del presente Real decreto:

- 1.º Los terrenos comprendidos dentro de los montes declarados o pendientes de declaración de utilidad pública, acerca de los cuales dictamine el Ministerio de Fomento que no conviene autorizar su legitimación.
- 2.º Los que se hallen bajo la dependencia de la Junta de Colonización y Repoblación interior.
- 3.º Los de la Dehesa de Castilseras.

4.º Las roturaciones efectuadas en las vías pecuarias, descansaderos y abrevaderos.

Los poseedores de terrenos no podrán acogerse a los beneficios de este Real decreto en los siguientes casos:

- a) Cuando las roturaciones interrumpen servidumbres de paso, fuentes o abrevaderos de interés público.

Sin embargo, podrán legitimarse las roturaciones que

se hallen en terrenos gravados con servidumbres de paso, siempre que sea posible variar el trazado de éstas en forma tal, que ni el nuevo recorrido ni la nueva pendiente influyan sensiblemente en las condiciones del tráfico.

También podrán ser legitimadas las roturaciones efectuadas en terrenos donde existan servidumbres de aguas, constituidas por fuentes o abrevaderos, siempre que se deje libre el aprovechamiento de las aguas, con la consiguiente servidumbre que gravará sobre la finca.

El pago del precio de los terrenos legitimados se verificará por anualidades, en el plazo de diez años. Los que efectúen el pago al contado, disfrutarán de los beneficios señalados en las leyes desamortizadoras, y los que dejen de efectuar los pagos en los plazos señalados, sufrirán las penalidades en las mismas determinadas.

Los legitimadores que no tuviesen amillaradas sus roturaciones para el pago de la contribución territorial, deberán satisfacer en cinco plazos anuales, y sin recargo alguno, la que corresponda al tiempo en que vengan poseyendo el terreno con anterioridad a la legitimación, pero sin que dicho tiempo pueda computarse por un período superior a cinco años.

Cuando un roturador, por su estado de pobreza, no pueda satisfacer el importe de la tasación de la parcela por él poseída, podrá legitimar la posesión de la misma con sujeción a las condiciones siguientes:

- a) Se acreditará, previa y debidamente, el estado de pobreza.
- b) La parcela legítimable, tendrá, como máximo, la extensión de una hectárea.
- c) Se impondrá al legitimador un canon redimible equivalente a la renta del 2 por 100 anual del capital en que se valore la parcela.

Legitimación en los terrenos de propios o comunes. (Según el Real decreto de 22 de diciembre de 1925).—No podrán ser legitimadas las roturaciones hechas:

- 1.º En terrenos que estén comprendidos dentro de los montes declarados de utilidad pública, salvo que el Ministerio de Fomento diese su aprobación. Estos montes son los excluidos en el catálogo formado en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4.º del Real decreto de 27 de febrero de 1897.

2.º En terrenos que estén comprendidos en montes que, a juicio de los distritos forestales o divisiones hidrológicas, deban ser objeto de declaración de utilidad pública, aunque no figuren en el Catálogo.

3.º En montes que se hallen bajo la dependencia de la Junta de Colonización y Repoblación interior.

4.º En las vías pecuarias, descansadero y abrevaderos y cualesquiera otros bienes de dominio público.

Para ser considerado como poseedor de terrenos y tener derecho a disfrutar del expresado beneficio, habrá de acreditarse la posesión, previa y continua, de dichos terrenos:

a) Durante un año y un día, respecto de extensiones que no excedan de tres hectáreas.

b) Durante un año y un día, más otro año por cada hectárea de exceso sobre tres, respecto a extensiones mayores de tres hectáreas, y en ningún caso mayor de diez. Los indicados plazos sólo podrán contarse hasta el día 1.º de enero de 1926.

Los poseedores de terrenos comunales o de propios que deseen legitimar su posesión, deberán solocitarlo en el plazo de tres meses, a contar desde la publicación de este Real decreto, ante el alcalde; éste, en el plazo de diez días, insertará en el *Boletín Oficial* de la provincia un anuncio.

El Alcalde y, en su caso, el mismo solicitante, deberá dar cuenta del anuncio en la división hidrológica correspondiente.

Si en el plazo improrrogable de un mes, a contar desde la publicación del anuncio de cada solicitante en el *Boletín Oficial*, se presentara oposición fundada en motivos de carácter civil, el alcalde, de oficio o a requerimiento de la Autoridad judicial competente, suspenderá la tramitación del expediente, señalando al opositor, en su caso, el plazo de un mes para que justifique haber presentado, ante los Tribunales ordinarios, la correspondiente demanda que ésta le ha sido admitida; transcurrido dicho plazo, sin justificar los referidos extremos, se continuará el expediente administrativo; pero si resultase formalizada la contienda civil, se espera a que sobre el pleito recaiga sentencia ejecutoria.

El jefe del Distrito forestal de la división hidrológica, podrá oponerse a la legitimación:

a) Cuando se trate de monte incluído en el Catálogo de los de utilidad pública.

b) Cuando, a su juicio, el monte a que pertenezca el terreno roturado, deba ser objeto de aquella declaración, aun cuando no figure en el Catálogo aludido.

La Delegación de Hacienda sólo interviene en estos expedientes, cuando la roturación afecte a montes comunes o de propios en que el Estado sea partícipe del 20 por 100 de la tasación.

Resueltos los incidentes previos, si se hubieren suscitado, se verificará el deslinde, mensura y tasación de la finca. Estas operaciones serán realizadas en el caso previsto en el párrafo anterior por el perito que designe la Dirección general de la propiedad y Contribución territorial, y en otro caso, por el que elija el Ayuntamiento entre los que presten servicios en el Ministerio de Hacienda y se hallen autorizados por éste.

De dichas operaciones se formalizará la correspondiente acta.

Terminadas las operaciones de deslinde, mensura y tasación, se elevará lo actuado si se trata de monte en que el Estado es partícipe o Delegación de Hacienda en la provincia, que resolverá oyendo al abogado del Estado previamente, y en los demás casos, a la corporación municipal.

El pago del 20 por 100 que corresponde al Estado,

deberá verificarse por anualidades en el plazo máximo de diez años.

Cuando un Ayuntamiento estime que le pertenece el importe íntegro de la roturación, debe remitir a la Delegación de Hacienda en la provincia, justificación de haber satisfecho al Estado el 20 por 100 correspondiente a la excepción de la venta, en concepto de aprovechamiento común o dehesa boyal.

Cuando un roturador por su estado de pobreza no pueda satisfacer el importe de la tasación de la parcela por él poseída, podrá legitimar esta posesión con sujeción a las condiciones siguientes:

a) Se acreditará previa y debidamente ante la Delegación de Hacienda respectiva, el estado de pobreza mediante la información oportuna.

b) La parcela legítimable tendrá como máximo la extensión de una hectárea.

c) La Delegación de Hacienda, a propuesta de la Administración de Rentas públicas, fijará un canon no superior al 2 por 100 anual del 20 por 100 de la tasación. El canon será redimible a voluntad del legitimador por su capitalización al 4 por 100.

El título de legitimación, cuando fuere hecha con intervención del Estado, consistirá en la certificación que debe expedir el Delegado de Hacienda.

El Real decreto que estamos exponiendo, establece análogas normas que las establecidas en el Decreto de 1.º de diciembre de 1923, para cuando los legitimadores no tuvieran amillaradas sus roturaciones.

Intervención de fondos de Ayuntamiento

CONCURSOS

Se anuncia concurso en la *Gaceta* del 28 de los corrientes por el término improrrogable de un mes la provisión de la Intervención de fondos del Ayuntamiento de Palma de Mallorca (Baleares), por renuncia del que la desempeñaba, dotada con el sueldo de 9.000 pesetas anuales.

En la *Gaceta* del 23 de los corrientes, se anuncia concurso por el término improrrogable de un mes, la provisión de la Intervención de fondos del Ayuntamiento de Haro (Logroño), vacante por dimisión del que la desempeñaba, y dotada con el sueldo anual de 4.500 pesetas.

Todas aquellas personas a quienes interesen resolver cuestiones relacionadas con el Derecho Municipal, deben suscribirse al «Consultorio Reus» y a la «Gaceta de los Ayuntamientos».

Puerta del Sol, 13.—Madrid

GALERIA DEL SECRETARIADO ESPAÑOL



DON FRANCISCO NARBONA
Secretario del Ayuntamiento de Siero (Asturias)

He aquí uno de los funcionarios más jóvenes e inteligentes de cuantos forman parte del Cuerpo de Secretarios municipales.

El señor Narbona nació en Villanueva del Huerva (Zaragoza), en 10 de marzo de 1899, cursó brillantemente sus estudios en Madrid y en Murcia y se licenció en Derecho en 1920.

En las oposiciones celebradas el año anterior, para ingreso en el Cuerpo de Secretarios de primera categoría, obtuvo el número 6, de los 166 aprobados, cabiendo al Instituto Reus la honra de haber tenido en sus aulas, como alumno, al señor Narbona.

La Dirección general de Administración, teniendo en cuenta sus méritos excepcionales, nombró al señor Narbona Secretario del Ayuntamiento de Siero, de donde tomó posesión en 17 de agosto último.

La labor que tan culto funcionario ha desarrollado en el importante Municipio asturiano, ha sido provechosa, como lo prueba el hecho de que por ella se le

hayan concedido varios votos de gracias. Su intervención en las diferencias sufridas entre dicho Ayuntamiento y el de Noreña, por asuntos de consumos, fué tan entera y eficaz, que la fórmula por él propuesta fué aceptada por los dos Ayuntamientos y obra en el archivo del Gobierno civil de Oviedo.

Ha redactado la Carta municipal de Siero y el Reglamento de régimen interior de los funcionarios municipales, documentos ambos que son modelos en su género, y ha confeccionado un presupuesto extraordinario de 500.000 pesetas, con destino al abastecimiento de aguas del Ayuntamiento.

Esta labor y otra complementaria no menos importante, desarrollada en poco más de medio año, demuestra la gran capacidad del señor Narbona y su vocación para el Secretariado.

Actualmente el señor Narbona se encuentra en Madrid, representando a su Ayuntamiento en el actual Congreso Municipalista, de igual modo que le representó en el anteriormente celebrado.

DE DIEZ EN DIEZ DIAS

LA CONSTRUCCIÓN DE CASAS BARATAS

En la *Gaceta* del miércoles 28, aparece un Real decreto del Ministerio de Hacienda, relacionado con los empréstitos que pueden emitir los Ayuntamientos para la construcción de casas baratas y que por la importancia que encierra para la vida municipal reproducimos íntegro:

Artículo 1.º Los Ayuntamientos que deseen emitir empréstitos con el aval del Estado para la construcción de casas baratas, remitirán al Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria los datos que previene el párrafo segundo del artículo 3.º del Real decreto de 20 de diciembre de 1924.

Artículo 2.º El Ministro de Trabajo, Comercio e Industria, previo los informes precisos de la Sección de Casas baratas, aprobará los proyectos y plan de obras si resultan acordes con la Legislación general en la materia.

Artículo 3.º La citada Sección de Casas baratas emitirá informe respecto al proyecto de empréstito, a sus características y a la suficiencia de las garantías que los Ayuntamientos ofrezcan en relación con el mismo.

Artículo 4.º Informarán a continuación las Direcciones generales de la Deuda y Clases pasivas y Tesorería y Contabilidad del Ministerio de Hacienda y el Consejo de Estado, debiendo emitirse tales informes en término de quince días las Direcciones generales, y en el de un mes el Consejo de Estado. Transcurridos tales plazos sin que el informe se hubiera emitido, se entenderá que ha sido favorablemente a la concesión del aval.

Artículo 5.º Después de dichos informes, el Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria someterá el asunto a la resolución del Consejo de Ministros, formulando él la oportuna propuesta.

Artículo 6.º Concediendo el aval del Estado, y emitido el empréstito, serán de aplicación todas las reglas que, respecto a inspección y control, se establecen en los artículos 2.º, 3.º y 4.º del Real decreto del Ministerio de Hacienda de 24 de enero de 1926.

Artículo 7.º Las Sociedades que pretendan solicitar el aval del Estado para la emisión de cédulas inmobiliarias, conforme las disposiciones publicadas a este propósito, necesitarán estar constituidas ante Notario, e inscritas en el Registro mercantil si son Sociedades mercantiles, a fin de que el poseedor de los títulos que emita la entidad pueda tener conocimiento, en su caso, de los antecedentes que facilite el Registro. Cuando se trate de Sociedades no mercantiles, tales como las Cooperativas u otras de naturaleza equivalente, bastará con que estén constituidas con arreglo a las leyes especiales e inscritas en el Registro especial, de carácter público, que deberá organizarse en el Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria. Los Estatutos de unas y otras entidades habrán de estar aprobados por dicho Ministerio.

Artículo 8.º Las Sociedades cooperativas y sus similares deberán llevar sus libros de contabilidad por partida doble, teniendo, por tanto, un libro de inven-

tarios y balances, un libro Diario, un libro Mayor, un copiador de cartas y telegramas y cuantos otros libros oficiales deben recoger el desenvolvimiento social. Estos libros quedan exentos de derechos de Timbre y deberán estar autorizados en forma por el Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria o por sus organismos provinciales.

Artículo 9.º Las entidades de que se trata, quedarán sometidas a las siguientes intervenciones oficiales:

a) De los funcionarios del Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria a quienes se designe especialmente para que examinen los libros de contabilidad, a fin de comprobar en todo momento que la entidad cuyos títulos se avalan se desenvuelve conforme a sus previsiones y compromisos.

b) De la Dirección general de la Deuda y Clases pasivas, que tendrá que informar previamente la autorización de la puesta en circulación de los títulos avalados, a fin de que no se perjudique el crédito general del Estado y no concurran en los mercados nacionales conjuntamente con otros títulos que el propio Estado pueda negociar directamente.

Artículo 10. Las entidades darán intervención y admitirán en sus Juntas generales a una representación, con voz y sin voto, de los tenedores de los títulos avalados que represente, diez días antes de la fecha señalada para la Junta, por lo menos, el 5 por 100 de la emisión. Desde veinte días antes de la fecha señalada para la celebración de la Junta general, la Sociedad tendrá a disposición de los tenedores de cédulas avaladas los libros de contabilidad y de actas para que aquéllos puedan examinarlos.

Artículo 11. La concesión del aval del Estado se hará previos los trámites que se detallan en el artículo 15 y siguientes del Real decreto de 29 de julio de 1925, por medio del Real decreto acordado en Consejos de Ministros, habiendo oído en el expediente a las Direcciones generales de la Deuda y Clases pasivas y Tesorería y Contabilidad del Ministerio de Hacienda y al Consejo de Estado.

En dicho Real decreto se autorizará la emisión de la cantidad total de cédulas inmobiliarias para las cuales no tenga solicitado el aval. Los informes mencionados habrán de emitirse en idénticos plazos y condiciones expresadas en el artículo 4.º

Artículo 12. La totalidad de los títulos emitidos con el aval del Estado quedará en poder de la Hacienda, en custodia, en la Caja general de Depósitos.

Artículo 13. La puesta en circulación de las cédulas avaladas será autorizada por el Ministerio de Hacienda, sin más trámites que un informe del de Trabajo, Comercio e Industria, en el que se haga constar el importe de las inversiones realizadas en la construcción de viviendas completamente terminadas y recibidas, en la forma que previene el artículo 23 del Real decreto-ley de 29 de julio de 1925, y el valor de los terrenos en que se hayan verificado las construcciones; informará asimismo la Dirección general de la Deuda

respecto a la oportunidad del momento en que ha de verificarse la puesta en circulación de los títulos.

Artículo 14. La cantidad mínima de cédulas cuya circulación puede autorizarse, no será inferior a 250.000 y en ningún caso podrá ser superior al valor de las construcciones recibidas y al de los terrenos, sin que pueda asignarse tampoco nunca a estos gastos un valor superior al 40 por 100 del coste de las construcciones.

Artículo 15. Para que se autorice la puesta en circulación de las cédulas avaladas, será indispensable que la Cooperativa tenga capital propio efectivo equivalente, por lo menos, al 10 por 100 de la suma pedida, cuando se trate de Cooperativas de Funcionarios públicos, y del 25 por 100 cuando se trate de Cooperativas de Escritores y Artistas.

Artículo 16. Las Juntas directivas o gestoras de las Cooperativas a quienes se haya autorizado para emitir cédulas con el aval del Estado responderán personal y solidariamente de la inaplicación o aplicación indebida de los fondos recaudados de los socios con destino a pagar las viviendas adjudicadas a cada uno de ellos.

Artículo 17. Desde el momento que se autorice la emisión de las cédulas inmobiliarias avaladas por el Estado en la forma regulada en los artículos anteriores serán de aplicación las normas que respecto a la inspección y control se establecen en los artículos 2.º, 3.º y 4.º del Real decreto de Hacienda de 24 de enero de 1926.

Artículo 18. Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de los Reales decretos de 20 de diciembre de 1924 y 29 de julio de 1925 que se opongan a lo establecido en los artículos antecedentes.

NOTICIAS

En la jubilación concedida por el Ayuntamiento de Quintanilla de Arriba (Valladolid), a su Secretario, don Melquiades Carrascal Tejedor, se le abonan los cuatro quintos de su último sueldo de 2.500 pesetas en la forma siguiente:

Al Ayuntamiento de Quintanilla de Arriba, le corresponden al mes 39,632 pesetas, y al Ayuntamiento de Padilla de Duero, 127,034 pesetas.

El primero de los Ayuntamientos citados, tendrá la obligación de recaudar del segundo la parte que le ha correspondido, y abonar a don Melquiades Carrascal, mensualmente, 166,666 pesetas.

Agrupación de Ayuntamientos

En virtud de Reales decretos insertos en la *Gaceta* del 22 de los corrientes, se aprueban las agrupaciones de los siguientes Ayuntamientos, a los efectos de tener un Secretario común:

Anzanigo.	}	Huesca.
Triste		
Brincones	}	Salamanca.
Irueta.		
Cubo de Benavente	{	Zamora.
Molezuelas de la Carballeda		

Nombramiento

Por Real orden inserta en la *Gaceta* del 23 de los corrientes, ha sido nombrado don José Rodríguez Gordillo, Jefe provincial de la Sección de Presupuestos municipales de Huelva.

BOLETIN DE INSCRIPCION EN EL

CONSULTORIO REUS

El Ayuntamiento o D..... de.....
provincia de....., se inscribe en dicho Consultorio por la cantidad de.....
pesetas, que remite por giro, en sellos de correo o pagará a la presentación de la letra que le
gire dicho Consultorio.

..... de de 1926

Por el Ayuntamiento,

(Firmará el Secretario o persona interesada en ello)

Subráyese la forma de pago que se elija.

LA JUNTA CENTRAL DEL SECRETARIADO

El artículo publicado en nuestro número anterior, acerca de este asunto, que de modo tan directo y esencial interesa a los Secretarios municipales, ha hecho que numerosos individuos del Cuerpo se dirijan a nosotros preguntándonos en qué situación se encuentra aquél. La demanda es justísima y vamos a satisfacer la natural curiosidad de nuestros comunicantes, publicando todo lo que hay respecto a cuestión tan interesante.

Con fecha 13 de marzo último, el dignísimo Secretario del Ayuntamiento de Madrid, como Presidente del Colegio oficial del Secretariado local de la provincia, dirigió al Ministro de la Gobernación la siguiente instancia:

“Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación:

Don Francisco Ruano y Carriedo, Presidente del Colegio oficial del Secretariado local de Madrid, ante V. E., respetuosamente, expone:

Que en la reunión celebrada recientemente en esta capital por las representaciones de todos los Colegios del Secretariado local de España, se ha manifestado la conveniencia de interesar de los poderes públicos que, como complemento de la creación de dichos Colegios oficiales, por Real decreto de 6 de septiembre de 1925, reforma con tanta satisfacción recibida por el Cuerpo de funcionarios de la Administración local, se interese la creación de una Junta central, formada por representantes elegidos por los mismos Colegios Secretariales y con residencia en Madrid, que se encargaría de todos aquellos asuntos cuyo trámite hubiera de tener lugar en esta capital, y a la vez pudiera servir de órgano de relación del Gobierno con los Colegios Secretariales y de informe en los casos en que aquel lo estimase conveniente. A la vez los representantes de los Colegios del Secretariado, coinciden en la conveniencia para dar las debidas condiciones de defensa y de independencia a los funcionarios locales, se conceda el derecho de audiencia a los Colegios, en los expedientes que se sigan por las Corporaciones contra los Secretarios e Interventores de Diputaciones provinciales y Ayuntamientos, informe que deberá ser de carácter obligatorio, y respetando, como es natural, la libertad de resolver que tienen dichas entidades, pero ello serviría, no sólo para el fin expresado, sino para garantía de los mismos en cuanto habría de contribuir a la sanción de las faltas que se cometan y que nadie más interesado que la propia clase Secretarial, en que tengan la debida sanción cuando se justifiquen plenamente.

También fué objeto de estudio de los Colegios, la necesidad de facilitar recursos económicos suficientes para las obligaciones que se les impone, y que exigen gastos de alguna importancia a los que, seguramente, no podrá atender con la cuota de los asociados, conviniéndose en la facilidad que pudiera ofrecer el establecimiento de un derecho de imposición de sello en las instancias que se presenten en las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos, aunque no en forma expresa de tal sello, sino de participación de un tanto por ciento en los que se expidan en igual concepto por las Corporaciones provinciales y municipales que lo tengan establecido, o caso negativo, sobre las certificaciones que se expiden o, por último, con la recomendación que

se pudiera hacer a los que no tuvieran ni uno ni otro impuesto, para que concedan subvenciones a los Colegios Secretariales. Por virtud de lo expuesto, y sin necesidad de mayores ampliaciones que no precisan para el conocimiento exacto que V. E. tiene de la materia, y esperando de su espíritu decidido para favorecer la mejora del funcionamiento de los empleados de Administración local, en beneficio de las Corporaciones,

Suplico a V. E., respetuosamente, en la representación de los demás Colegios oficiales del Secretariado local, se sirva acceder a las siguientes peticiones:

Primera. Que se acuerde la creación de un Consejo de Federación de los Colegios oficiales del Secretariado local, con residencia en esta Corte, y formado por un reducido número de vocales, en la proporción que se considere conveniente por la superioridad y por nombramiento de los mismos Colegios.

Segunda. Que se establezca la obligación de que se informe por los Colegios Secretariales, por escrito, en todos los expedientes que se sigan por las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos, contra Secretarios e Interventores, en el plazo que debidamente se señale y a reserva de la libre resolución de las Corporaciones, dentro de sus facultades.

Tercera. Que se conceda a los Colegios Secretariales, a título de recurso económico para subvenir a las atenciones que les impone la disposición legal de su creación, una participación en el impuesto del sello y timbre municipal que establezcan las Corporaciones, o en su defecto, en las certificaciones que por las mismas se expidan, cuya cuantía se determinará por el Gobierno; y en las localidades en donde no se hallen establecidas estas percepciones, pueden recomendarse la concesión de subvenciones.

Gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.

Madrid, 13 de marzo de 1926. Francisco Ruano.—Rubricado.”

A la anterior instancia, contestó el Ministerio de la Gobernación con la siguiente Real orden comunicada:

“Vista la instancia elevada a este Ministerio, con fecha 13 de marzo último por el Presidente del Colegio oficial del Secretariado local de Madrid, en la que ostenta la representación de los demás colegios oficiales del Secretariado local de España, en súplica:

Primero. Que se acuerde la creación de un Colegio de Federación de los Colegios del Secretariado local, con residencia en Madrid, formado por reducido número de vocales, en la proporción que se considere conveniente por la superioridad y por nombramiento de los mismos Colegios.

Segundo. Que se establezca la obligación de que se informe por escrito, por los mismos Colegios Secretariales en todos los expedientes que se siguen por las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos, contra los Secretarios e Interventores a reserva de la libre resolución de las expresadas Corporaciones, dentro de sus facultades, y

Tercero. Que se conceda a los Colegios Secretariales, a título de recurso económico, para subvenir a las atenciones que les impone la disposición legal de su

creación, una participación en el impuesto del sello y timbre municipales que establezcan las Corporaciones municipales y provinciales o, en su defecto, en las certificaciones que por las mismas se expiden; pudiendo las localidades donde no se hallen establecidas estas percepciones, obtenerse una subvención.

Resultando: que pasada la referida instancia, por decreto de la Dirección general de Administración, a informe de las Secciones 2.ª y 3.ª de la misma, en 12 de abril del corriente año; informa la primera de las secciones citadas, "que la participación en el impuesto del sello y timbre municipal de las Corporaciones supone una merma en los ingresos de éstas que constarán consignados en sus presupuestos en la cuantía calculada, y siendo la formación de estos asuntos de la exclusiva competencia de los Ayuntamientos, con arreglo al número 23 del artículo 150 del Estatuto municipal, podrían resolver sobre la petición, toda vez que como obligación impuesta por el Ministerio, no parece que cabe, con arreglo al espíritu de dicho texto legal; y por esto mismo no procedería que el Gobierno determinase la cuantía que en defecto para las certificaciones igualmente se interesa"; y que la segunda de las secciones citadas, informa también, "que por lo que se refiere a los Ayuntamientos, nada tiene que oponer a lo dicho por la Sección 2.ª, y en cuanto a las Diputaciones, sostiene el mismo criterio, en el caso de que el impuesto de referencia sea un derecho o tasa; y aun suponiendo que lo tuvieran establecido, por percibir el recargo autorizado por el artículo 241 y siguientes del Estatuto provincial, a éste no cabe aplicar lo que se pretende, sin otra disposición análoga, es decir, sin un Decreto Ley".

Considerando: que en debido acatamiento a lo dispuesto en el artículo 8.º del Real decreto ley de 6 de septiembre de 1925, este Ministerio ha de redactar el Reglamento general de los Colegios oficiales del Secretariado local, en el que habrán de contenerse, dándole forma y efectividad, cuanto fundamentalmente afecta a la esencia de estos organismos, a su modo de funcionar y al modo de arbitrar recursos con que hagan frente a las necesidades de su vida y sucesivo desarrollo.

Considerando: que para llegar a tal fin, ha de preceder una previa información, entre los mismos Colegios, a la que podrán aportar sus iniciativas y juicios, que de tal suerte podrán ser tenidos en cuenta al redactarse el expresado Reglamento, haciéndose obra de conjunto y no la fragmentaria que originaría el resolver de momento la propuesta de que se ha hecho mérito en los resultandos de esta disposición.

Considerando: que sobre tan importante materia ha de ser oído el Consejo de Estado, según determina el antes citado artículo 8.º del mencionado Real decreto de creación de los Colegios Secretariales, sometiéndose después por este Ministerio a la aprobación del Gobierno la expresada reglamentación, en la que podrán tener cabida las aspiraciones de los Colegios en cuanto deban ser consideradas como legítimas y no supongan menoscabo de las facultades, intereses y prerrogativas de las Corporaciones municipales, garantías que deben adoptarse para la más acertada resolución de tan interesante materia,

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido demorar la resolución de las peticiones contenidas en la instancia del Presidente del Colegio oficial del Secretariado local de la provincia de Madrid, hasta que por este Centro se proceda a la redacción del Reglamento general de los expresados Colegios, en el cual podrán tener la solución procedente, y con objeto de aproximar en lo posible la fecha en que ello haya de tener efecto, se abra la información previa entre los mismos que ordena el artículo 8.º del Real decreto de 6 de septiembre próximo pasado, la que se anunciará por término de dos meses, dentro de cuyo plazo, los Colegios de que se trata, podrán elevar sus propuestas a este Ministerio a los fines expresados.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, abril de 1926. S. Martínez Anido."

Efectivamente, de acuerdo con lo consignado en la parte dispositiva de la anterior resolución, la *Gaceta de Madrid*, correspondiente al día 25 del actual, publica la siguiente importantísima Real orden:

El Real decreto-ley de 6 de septiembre de 1925 ordenó la constitución en cada provincia, excepto en Navarra, de un Colegio oficial del Secretariado local, de los que serían miembros obligadamente los Secretarios de las Diputaciones provinciales, de las Mancomunidades municipales y de los Ayuntamientos integrantes de la provincia, debiendo tener su residencia oficial estos Colegios en la capital de la provincia respectiva.

Más tarde, por Real orden de 11 de diciembre de 1925, fué impuesta la obligación de formar parte de estas Corporaciones oficiales a los Interventores de fondos y Jefes de las Secciones provinciales de Presupuestos municipales, para lo cual se constituirían en dichos Colegios Secciones con la denominación de "Interventores de Fondos", con derecho a tener representación en la Junta de Gobierno, a cuyo fin se ampliaría el número de Vocales que señala el artículo 4.º del Real decreto-ley de referencia.

Deseoso el Gobierno de que estos organismos respondan al objeto de su creación y puedan prestar el servicio que se puntualizaba en el preámbulo del citado Decreto-ley, el Ministerio de la Gobernación, cumpliendo con lo ordenado en el artículo 8.º de aquella soberana disposición, ha de abrir una información previa entre estos Colegios, como medio para llegar a la redacción del Reglamento general que ha de regular la vida y funcionamiento de aquéllos; y con el fin de que tal disposición reglada pueda llevarse a cumplido término,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:

1.º Que en las provincias donde no se haya constituido aún el Colegio del Secretariado local, en la forma que dispuso el Decreto de 6 de septiembre de 1925 y Real orden de 11 de diciembre del mismo año, se constituyan en el término de un mes, a partir de la publicación de esta Real orden en la *Gaceta de Madrid*, debiendo los Gobernadores civiles dar cuenta a este Ministerio de haber sido cumplida esta disposición.

2.º Que teniendo en cuenta los Colegios del Secretariado local el espíritu y fines del Real decreto-ley de su constitución, acudan al Ministerio de la Goberna-

ción a la información escrita que por término de dos meses queda abierta en este Departamento, y la cual comprenderá:

1.º Cuantas observaciones consideren pertinentes para el desarrollo de los mismos, fines prácticos de su creación, mejoras que puedan introducirse en ellos, compatibles con el derecho municipal y provincial, y aquellas otras experiencias que haya evidenciado la práctica como indispensables para su funcionamiento, así como también las medidas que consideren indispensables para la defensa, prestigio y dignificación del Cuerpo; y

2.º Los planes e iniciativas que para el cumplimiento de los párrafos cuarto y quinto del artículo 3.º del Real decreto-ley de 6 de septiembre de 1925 les sugiera su buen deseo, así como los ingresos posibles que pudieran obtenerse en beneficio de los Colegios, con arreglo al sistema impuesto por la ley de su creación y cualquier otro medio viable y compatible con los Estatutos municipal y provincial, de considerarse aquellos insuficientes.

El plazo de admisión de escritos en esta información abierta empezará a regir desde el día siguiente de la inserción de esta Real orden en la *Gaceta de Madrid*

y *Boletines Oficiales* de provincia, la cual quedará cerrada en 30 de junio del presente año.

Los Gobernadores civiles dispondrán que se inserte esta Real orden en los *Boletines* de sus respectivas provincias para general conocimiento.

De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 23 de abril de 1926.—Martínez Anido.

Tal es el estado actual de la cuestión, que ha entrado en una fase de gran eficacia y viabilidad. De cuanto ocurra en lo sucesivo, tendremos al corriente a nuestros lectores.

CARTAS MUNICIPALES

Por Reales decretos insertos en la *Gaceta* del 22 de los corrientes han sido aprobadas las Cartas municipales de los Ayuntamientos siguientes:

Villafranca de los Caballeros (Toledo).

Benatar (Jaén).

Chiloeches (Guadalajara).

Aznalcázar (Sevilla).

Cortes de la Frontera (Málaga).

Vendrell (Tarragona).

Este número ha sido visado por la censura

Plazas con 2.500 pesetas en el Ayuntamiento de Madrid

Publicado en el «Boletín Oficial» de 15 de marzo de 1926

El Ayuntamiento de Madrid convoca un concurso-oposición para proveer ocho plazas de Celadores de segunda clase de Mercados. Estos cargos están dotados con el haber anual de 2.500 pesetas.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días, contados, a partir de la fecha del anuncio de esta convocatoria en el *Boletín Oficial* de la provincia.

Las instancias, debidamente reintegradas, se presentarán en el Registro general de este Ayuntamiento durante los días y horas hábiles comprendidos en el plazo antes mencionado.

Para tomar parte en este concurso es requisito indispensable ser mayor de veinticinco años y no exceder de cuarenta y cinco; debiendo acompañar a la instancia los siguientes documentos: certificación de nacimiento del Registro civil, certificaciones de buena conducta, del Registro de Penados y facultativa que acredite no padecer defecto físico que le imposibilite para el servicio.

Los aspirantes demostrarán, mediante examen, conocimiento de las materias siguientes:

- Escritura al dictado.
- Aritmética: las cuatro reglas de enteros y decimales.
- Reglamento de Mercados.
- Abastecimiento de Madrid. Productos que son objeto de contratación en los Mercados de la Cebada y Mostenses.

e) Conocimiento de los mercados y centros productores españoles y tarifas ferroviarias.

El examen de las materias comprendidas en los apartados a, b, c y d, es obligatorio; el comprendido en el apartado e es voluntario.

Los exámenes se verificarán en la Casa de Cisneros (Salón de Subastas) transcurridos dos meses desde la fecha del anuncio en el *Boletín Oficial* de la provincia.

El Tribunal quedará constituido por el señor Delegado de Abastos, como Presidente; dos señores Concejales designados por la Alcaldía, un Profesor de Instrucción pública municipal, el Jefe de Mercados y el del Negociado de Abastos, que actuará como Secretario.

El Tribunal redactará el programa que se publicará al mismo tiempo que la convocatoria en el *Boletín Oficial* de la provincia.

Por ningún concepto podrán ampliarse las plazas a mayor número de las convocadas en el presente concurso.

De las ocho plazas objeto de la convocatoria, se reservarán tres a los procedentes del Ramo de Guerra, conforme al art. 97 del Reglamento de Secretarios, Interventores y Empleados municipales en general, debiendo someterse a las mismas pruebas de aptitud que los demás concursantes, teniendo presente esta proporción para que la primera vacante que ocurra la cubra el Ayuntamiento.

Preparación y «Contestaciones» en el

INSTITUTO REUS -- PRECIADOS, 23 -- MADRID

Clases nocturnas — Honorarios: 40 pesetas mensuales

Sr. D.

CAJA

Se suplica a los señores funcionarios del Cuerpo de Correos, que de no encontrar al destinatario, devuelvan este ejemplar a su procedencia.

Oposiciones a Secretarios de Ayuntamiento y Diputaciones

En la «Gaceta de Madrid» del 26 de febrero se publicó la convocatoria (más de cien plazas) de Secretarios de 1.ª y Diputaciones provinciales. Para tomar parte en esta oposición se requiere tener cumplida la edad de veintitrés años y haber terminado la carrera de abogado. Los exámenes comenzarán el 15 de septiembre.

INSTITUTO REUS, Preciados, 23, Madrid, ya ha empezado la preparación en sus clases y por correspondencia con el siguiente profesorado:

D. Marciano Zurita, Abogado, Jefe del Negociado de Secretarios de Ayuntamiento en el Ministerio de la Gobernación, por oposición, y Redactor Jefe de la GACETA DE LOS AYUNTAMIENTOS.

D. Arturo Fuertes, Abogado, funcionario también por oposición y Autor conocidísimo por sus obras y trabajos en materia administrativa: y

D. José Viñas Mey, Abogado y autor de varias obras de Derecho civil.

Dichos señores profesores y **D. Francisco Gómez de Llano,** Abogado del Estado, son los autores de las «Nuevas Contestaciones» que tenemos en prensa y de las que ya se han publicado varias entregas.

Las «Nuevas Contestaciones» valen 75 pesetas, pudiendo abonarlas en tres plazos mensuales de 25 pesetas.

Estimamos un deber advertir a los señores que tengan la obra al programa de las pasadas oposiciones que si desean completarla, pueden suscribirse a cualquiera de las materias que integran las «Nuevas Contestaciones». He aquí sus precios: Derecho Municipal, 14 pesetas; Provincial, 12 pesetas; Administrativo, 14 pesetas; Político, 7 pesetas; Legislación de Hacienda, 14 pesetas, y Derecho civil, mercantil e hipotecario, 14 pesetas.

De la competencia de nuestro Profesorado y de la bondad de las «Contestaciones», bastará indicar que en las oposiciones pasadas obtuvimos, para 160 señores preparados, 146 plazas, entre ellas los números 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, etc., etc.

Y, por último, advertimos a los opositores para Secretarios de segunda categoría, que esta convocatoria saldrá en mayo, y los exámenes empezarán en noviembre. Tenemos preparación en las clases y por correspondencia y facilitamos «Contestaciones». Pídanse detalles.

Para programas, textos, «Contestaciones», preparación en las clases o por correspondencia, prospecto gratuito de próximas oposiciones, presentación de instancias, etc., etc., diríjanse los señores de Madrid o provincias al

INSTITUTO REUS.—PRECIADOS, 23.—MADRID

No nos trasladamos ni tenemos Apartado en Correos. No se confundan con nuestros imitadores

Unico Centro de Enseñanza en España que ha obtenido el número 1 en más de veinte oposiciones y miles de plazas para sus alumnos.

PRENSA NUEVA.—Calvo Asensio, 3.—Madrid.



Como c
Real orden
legio Secr
la Govern
Excmo.
Excmo.
presidente
Madrid, a
Que dis
timo, dicta
entre los
fin de dar
to de 6 de
gos y en
clamento
previament
el Minister
bierno, co
Tiene el
respondan
el servicio
preambulo
seo que co
pañoles, q
er al Gol
con el ent
que, crean
condición
cionándole
doles la in
de exigirle
mos esfue
obra del re
sostén de
presente s
Por esta
informació
realidades
múltiples,
completa
propósitos.
Pero así